

C.A. de Santiago

Santiago, once de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Fernando Molina Lamilla, abogado, Director Jurídico de la Universidad de Chile, con domicilio en Avenida Diagonal Paraguay N° 265, piso 4°, oficina 403, comuna y ciudad de Santiago, en nombre y representación convencional de la referida Institución de Educación Superior, interpuso Reclamo de Ilegalidad en conformidad a los artículos 28, 29 y 30 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública (“Ley N° 20.285”), en contra del CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA (en adelante “el Consejo” o “el CPLT”), representado para estos efectos por su Director General (S) don David Alejandro Jesús Ibaceta Medina, o por quien lo subrogue legalmente; por haber incurrido en infracciones de ley con ocasión de la dictación de su Decisión de Amparo pronunciada en caso Rol C2517-20, pronunciada en la sesión N°1.129, celebrada el 17 de septiembre de 2020; y, en definitiva, acoger en todas sus partes, el reclamo incoado, dejando sin efecto la mencionada Decisión, declarando que no procede dar acceso a la información solicitada por el requirente

La ilegalidad de la decisión del Consejo que se impugna puede fundamentarse -indicó- en múltiples causales. La ley no establece un catálogo taxativo de causales de ilegalidad en las que pueda fundamentarse la reclamación y conforme al texto de la Ley N°20.285, nada obsta para que se invoquen como fundamento de la impugnación, otras razones de denegación no previstas en el artículo 21, como las demás causales de secreto establecidas en el artículo 21, así como conocer de las reclamaciones de ilegalidad interpuestas en contra de decisiones del Consejo para la Transparencia que ordenen la entrega de información -o la denieguen- con infracción a lo dispuesto en otras disposiciones de la Ley N°20.285, o en otras normas legales del ordenamiento jurídico.

Sostuvo que la decisión reclamada infringe diversas disposiciones legales e, incluso, constitucionales, que sirven de sustento a la



reclamación de ilegalidad. En efecto, al ordenar la entrega de la información solicitada por el requirente, sin considerar las causales de reserva esgrimidas por la reclamante -Universidad de Chile- y que sustentan el ejercicio del reclamo, el CPLT ha infringido lo dispuesto en los artículos 5°, 10°, 20, 21, 25, 28 y 33, letras b), j) y m), de la Ley N°20.285; en los artículos 2°, letras f), l), ñ), o), 4°, 7°, 9°, 12° de la Ley N° 19.628; y, en los artículos 8° y 19 N°4 de la Constitución Política de la República. Así, dicha decisión no sólo se pronuncia con evidente infracción de la Ley N°20.285, sino también en contra de lo dispuesto en otras normativas expresamente aplicables al CPLT e incluso nuestra Carta Fundamental.

Refirió que el servicio de registro y administración de los nombres de dominio .CL prestado por el Centro NIC Chile no se encuentra financiado con presupuesto público, ni se trata de información cuya titularidad sea de la Universidad de Chile, sino que el origen exclusivo de su financiamiento es originado esencialmente por la tarifa pagada por los terceros que pagan por los diversos servicios recibidos, quienes son titulares de los dominios registrados.

Adujo que la Decisión reclamada omite ponderar adecuadamente las alegaciones de NIC Chile respecto la existencia de información que contienen datos personales y que afecta la seguridad y derechos de terceros, infringiendo el numeral 2 de la Ley N°20.285, la Ley N°19.628 y la garantía constitucional del numeral 4 del artículo 19 de la Constitución.

Agregó que la conclusión expuesta se puede extender a todas las combinaciones posibles de datos del conjunto que se publica. En efecto -señaló- se puede saber la fecha de expiración o de creación de todos y cada uno de los dominios inscritos en .cl, pudiendo calificarse de dato personal a la fecha de creación o expiración, por cuanto se refiere a información relativa a una persona natural identificada o identificable.

Depuso que la entrega de la información afecta la seguridad de los titulares de dominio. El numeral 2 del artículo 21 de la Ley N°20.285 establece la denegación de información puede fundarse en la



circunstancia de que “su publicidad, comunicación o conocimiento [del listado de todos los dominios inscritos en .CL] afecta derechos de las personas, particularmente tratándose (...) de su seguridad, (...)”.

Citó la reciente publicación de la Norma Técnica de Ciberseguridad para el Diseño, Instalación y Operación de Redes y Sistemas Utilizados para la Prestación de Servicios de Telecomunicaciones (Resolución exenta 1.318, de 10 de agosto de 2020). Todos, sin ninguna excepción, de los riesgos que la Universidad ha insistido se encuentran implicados en la entrega del listado de nombres de dominio, se encuentran considerados en la referida norma técnica, aunado a que la entrega de la información afecta derechos de carácter comercial y/o económico de los titulares de dominio.

Acotó que conforme a la respuesta entregada al reclamante y en los descargos acompañados al procedimiento de amparo, corresponde denegar la entrega de la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento, en cuanto ello afectare derechos de carácter económico o comercial de los clientes y usuarios de dominios .CL, lo que acontece en la especie -explicó-.

Aseveró que la Decisión reclamada omite emplazar a los terceros que se verán afectados con la entrega de la información requerida.

En síntesis, -expuso- ante la petición de acceso a la información del señor Alexis López López, el CPLT ha calificado como una impertinencia el dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N°20.285.

Además, la decisión recurrida es ilegal cuando considera como una impertinencia dar aplicación al procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, al entender que se trata de “información que fuere publicada por el órgano en su página web en consideración a la reglamentación .CL y la política sobre publicación de datos del registro de nombres de dominio.cl”, sin atender las finalidades y alcances limitados de tales mecanismos de publicidad.

Destacó que la Decisión reclamada infringe lo dispuesto en el artículo 21 N°1 de la Ley N°20.285, toda vez que, sin considerar los



fundamentos de esta parte al efectuar sus descargos, descarta de plano cualquier afectación de las funciones de NIC Chile, además la comentada Decisión reclamada infringe lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley N°20.285, referente a la calificación de datos personales; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 inciso tercero de la misma Ley.

Solicitó que, en definitiva, que se acoja el reclamo interpuesto, dejando sin efecto la mencionada Decisión, y se declare que no procede dar acceso a la información solicitada por el requirente

SEGUNDO: Que, don David Ibaceta Medina, abogado, Director General y representante legal del Consejo para la Transparencia, evacuó el informe solicitado, formulando los descargos y observaciones respecto al Reclamo de Ilegalidad deducido en contra del Consejo para la Transparencia por don Fernando Molina Lamilla, en representación de la Universidad de Chile, en contra del Consejo para la Transparencia, interpuesto en virtud de lo señalado en el Art. 28 de la Ley de Transparencia (LT), con motivo de la dictación de la Decisión de Amparo Rol C2517-20 , solicitando que éste sea rechazado en todas sus partes.

Sostuvo que la Decisión de Reclamo Rol C2517-20, emitida por el Consejo para la Transparencia se encuentra totalmente ajustada a Derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, no configurándose ninguna ilegalidad en su adopción, y ratificándose la obligación de la Universidad de Chile de entregar la información que el Consejo dispuso sea proporcionada, por lo que no corresponde dejarla sin efecto y por lo tanto se rechazar en su totalidad el Reclamo de Ilegalidad presentado, resolviendo en definitiva mantener o confirmar la mentada Decisión de Amparo C2517-20 del Consejo

TERCERO: Que, Guillermo Villarroel Sanhueza, abogado, en representación Silva Abogados, del estudio jurídico Silva, dedicado a materias de propiedad intelectual, se hizo parte en el proceso en el cual se le está exigiendo a NIC CHILE que entregue información de los titulares de nombres de dominio.



Apuntó que los titulares de nombres de dominios son personas que tienen registrados dominios web en Chile, dentro de los cuales se encuentra su estudio de abogados quien a su vez administra los nombres de dominios de sus clientes, teniendo tanto el derecho como el deber profesional -esgrimió- de resguardar la información contenida en ellos.

Afirmó que el proceso judicial se está discutiendo la entrega de información de miles de nombres de dominio, entre ellos el dominio silva.cl de titularidad de su representado y de centenares que han sido registrados y son gestionados por su representado.

Alegó que la Decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) C2717-20 del 17 de septiembre de 2020, en su parte pertinente señaló lo siguiente: Entregue al reclamante el registro histórico con el nombre de todos los dominios actuales y eliminados en nic.cl, con indicación de la fecha de creación, de eliminación, servidor de nombre DNS, país emisor de la certificación, y demás datos solicitados referidos a personas jurídicas, en su calidad de titulares del dominio, contacto comercial y contacto técnico; a saber, su RUT, giro o actividad, dirección comercial, correo y número registrado. En el caso de los dominios eliminados y la información relativa al servidor de nombre DNS y país emisor de la certificación, se ordena la entrega en la medida que obre en alguno de los soportes documentales señalados en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia.

Aseveró que se trata de información sumamente sensible que abarca a las personas jurídicas, que afecta incluso la ciberseguridad de Silva, a la cual su representado se opuso. En efecto, su representado le dio instrucción expresa a NIC Chile para oponerse a dicha entrega.

Sostuvo que, con la finalidad de ejercer el derecho a ser oído, facultad básica del debido proceso que tiene una persona para la defensa de sus intereses, y siendo parte interesada y afectada, solicitó que se le tenga como parte en este proceso

CUARTO: Que, el Excelentísimo Tribunal Constitucional acogió el requerimiento deducido, por lo que se declaró la inaplicabilidad por



inconstitucionalidad de los artículos 5°, inciso segundo, 10, inciso segundo, 11 letra c) y 28, inciso segundo, de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, en el proceso seguido ante esta Corte de Apelaciones de Santiago, sobre reclamo de ilegalidad, bajo el rol N° 614-2020 (Contencioso administrativo. Que se rechaza el requerimiento respecto a las impugnaciones de los artículos 3, 4, 11 letras a), b) y d) y 15 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, y artículos 2° letra i), 4°, inciso quinto, 5°, 7° y 9°, de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.)

QUINTO: Que, en primer término, cabe tener presente, que el asunto sometido vía reclamación de ilegalidad, es decir, la información que mediante la Decisión de Amparo Rol C2517-20, conocida y emitida por el Consejo Para la Transparencia es claramente pública, ya que la referida información obra en poder de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, órgano y/o institución de educación superior de carácter público y quien está a cargo de la administración y registro de los sitios de dominio .cl. Al efecto, el reclamante, señala en su arbitrio que la mentada información no sería pública, por cuanto no sería un acto administrativo o una resolución, sin embargo, la Ley N°20.285 no solamente hace públicos los mencionados actos administrativos o resoluciones, si no que toda la información que obra en poder de los órganos de la administración del Estado, como lo es el caso de la Universidad de Chile. En efecto, el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República orienta e informa que “*Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.*”, principio de publicidad previamente consagrado, que tiene su respectivo correlato legal, entro otros, en los artículos 3, 4 y 11 de la Ley de Transparencia. Así esta misma Sala, en sentencia de data reciente, a saber, 4 de julio del presente año 2022, en causa IC 119-2021 resolvió que “*...en conformidad a la historia fidedigna de la Ley de Transparencia se encuentran amparadas todas las solicitudes de reserva que impliquen procesar la información para efectos de dar respuesta en la medida que*



se requiera dicha información.”. Criterio reiterado por la Corte en las causas 173-2020 y 91-2021 respectivamente.

SEXTO: Que, en relación a la sentencia dictada en estos antecedentes por el Excelentísimo Tribunal Constitucional y que declaró inconstitucional el artículos 5°, inciso segundo, 10, inciso segundo, 11 letra c) y 28, inciso segundo, de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, ello no es óbice para desvirtuar el carácter público de la información que el Consejo Para la Transparencia ordenó entregar, la cual no se pierde por la referida declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, ya que existe un acopio de otras disposiciones las que por sí mismas fundamentan el carácter público de la información entregada, a saber, los artículo 3° y 4° de la mentada Ley de Transparencia. Es así como la segunda norma citada dispone que: *“las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar estricto cumplimiento al **principio** de transparencia de la función pública.”* A su vez, en el inciso 2° la disposición en análisis le da un contenido normativo al mencionado principio al preceptuar que *“...consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.”* A su turno el artículo 3° literal e) del Reglamento de la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública define lo que se debe entender como documentos, esto es: *“todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo, diagrama, documento gráfico, fotografía, microforma, grabación sonora, video, dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales y, en general, todo soporte material que contenga información, cualquiera sea su forma física o características, así como las copias de aquéllos.”* Pues bien, información precisamente de dicha naturaleza fue la que se ordenó entregar en estos autos por el CPLT reclamado. Lo anterior ha sido resuelto por esta



Sala en la citada causa 119-2021 al resolver que “...este *palmario carácter público de la información no se pierde por la declaración de inconstitucionalidad del artículo 5 inciso 2° de la Ley N° 20.285, dictaminada por el Excelentísimo Tribunal Constitucional en la causa rol 11.150-2021, por cuanto existen otras normas comprendidas en la referida Ley de Transparencia que según su tenor literal permiten por sí mismas justificar y fundamentar el carácter público de la información requerida. A saber, los artículos 3, 4, 10, 11 literales A, C, D y E, todos de la mentada Ley N°20.285.*”

Avala lo indicado precedentemente un fallo de la Excma. Corte Suprema en causa 58.508-2020 que en su motivación undécima señala “Que, en cuanto al fondo y, conforme esta Corte se pronunció, en los autos Rol N° 1.824-2019, el correo electrónico es información pública, en cuanto se trata de una comunicación entre funcionarios públicos, emitida a través de canales institucionales, que puede ser considerada como complementaria, de manera directa y esencial, a un acto administrativo.” Luego en el considerando duodécimo nuestro máximo Tribunal sentencia “... la conclusión antes anotada no se desvirtúa por la declaración de inaplicabilidad dispuesta por el Tribunal Constitucional en causa Rol N° 5841-18-INA respecto de los artículos 5° inciso 2° y 10 de la Ley N° 20.285 pues, se insiste, incluso sin acudir a tales normas, la información objeto del conflicto ha de considerarse pública, requiriendo, para su secreto o reserva, la configuración de alguna de las causales taxativamente señaladas en la ley.”

En suma, el carácter público de la información, objeto de controversia, se mantiene, en virtud del artículo 3, 4 y 11 letras a, b y d de la Ley de Transparencia.

SÉPTIMO: Que, sobre las causales de reserva que se han enarbolado en la especie, cabe primeramente pronunciarse sobre el motivo de reserva del artículo 21 N°1 literal C del cuerpo de leyes en estudio, que dice relación con una supuesta afectación al debido cumplimiento de las funciones de la Institución de Educación Superior reclamante, provocada por una eventual distracción indebida y al efecto



se levantaron dos alegaciones. En primer lugar, que la afectación se produciría, puesto que se tendría que notificar a todos sus titulares, lo que deberá ser desestimado, por cuanto el artículo 20 de la comentada Ley N°20.285 establece que se debe notificar a los terceros en la medida que puedan verse afectados por la entrega de la información y en la especie no existe afectación alguna, ya que se reservó **toda** la información, -según el motivo duodécimo de la decisión del CPLT- en lo atinente a las personas naturales y respecto de las personas jurídicas en gran parte la información reclamada se mantiene publicada por el órgano en su página web institucional.

Así, las cosas, cuando se alude a la distracción indebida, el artículo 7° N°1 letra C del referido Reglamento de la Ley N.º 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública *“...considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales.”* Luego, la Casa de Estudios Superiores no acreditó ni explicó de ninguna forma, el tiempo necesario para entregar la información, ni menos aun, qué personal requería para dar aplicación a dicha información, es decir, no dotó de contenido plausible a la causal de reserva del artículo 21 N°1 literal C de la precitada Ley N°20.285. Corroborar lo antes anotado una sentencia de la Excma. Corte Suprema en causa rol 6663-2012 la cual en su considerando undécimo consigna al respecto *“...la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano, debería explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud de marras podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de la SBIF, ..., sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales como daños en el funcionamiento del sistema funcionario y bancario o afectación de factores sensibles del mercado financiero o señales al mercado ni menos referencias “de paso” como expresa el fallo recurrido refiriéndose al interés nacional supuestamente afectado...”*



OCTAVO: Que en lo atinente a la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley N°20.285, esto es, que la concurrencia de su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. Cabe precisar, en primer término, que el CPLT no dispuso la entrega de datos personales, reservando expresamente la información referente a este punto, lo cual se desprende claramente del considerando décimo de la decisión reclamada en alzada. A su vez, se alegó la vulneración a la seguridad de las personas por posibles ataques informáticos -argumento- que a juicio de esta Corte carecen de consistencia, por cuanto el mismo órgano reclamante *-según se informó-* con una periodicidad mensual publica en su página web información institucional respecto de las mismas páginas web que registra, alcanzando un total de más de trece mil nuevos registros (13.000), singularizados cada uno de ellos, sin que se afecte por la Universidad de Chile reclamante, con esta publicación, el numeral 2 del citado artículo 21 de la Ley de Transparencia, por lo que se entiende que si existiera un real riesgo de los supuestos ataques cibernéticos alegados, la mentada Casa de Estudios Superiores no habría publicado ninguna información referida a este punto.

Asimismo, se ha enarbolado en relación con este motivo de reserva en análisis (21 N°2 Ley N°20.285), una afectación a los derechos económicos y/o comerciales. Sobre el tópico la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°49981-2016, específicamente en su motivación décimo novena razonó en el sentido que *“...se tiene que demostrar, además, que su divulgación genera o que podrá generar un daño específico al valor jurídicamente protegido, relativo al interés comercial o económico, debiendo ser desestimada la alegación que propugna la reserva si nada de aquello que nominalmente se sostiene se plasma en la materialidad de lo que se pretende publicitar, requiriéndose prueba por quien aspira a hacer excepción a la regla que tiende a la mayor publicidad posible acerca del daño sustancial a la*



posición competitiva del titular de la información, v. gr., acerca de la competencia actual y la posibilidad de daño competitivo sustancial, nada de lo cual fue acreditado en estos autos, de manera que mal puede alegarse una actual o potencial disminución patrimonial si elemento alguno acerca de aquello fue ofrecido por los interesados en la mantención de la reserva.”. Situación antes descrita y resuelta, que tampoco ha sido acreditada en autos, por lo que malamente se evidencia afectación alguna en los términos que se levantaron, tanto por el órgano reclamante y el tercero interesado. Es más, y nuevamente sobre este punto la Excma. Corte Suprema en causa Rol 12793-2019 consignó en su considerando undécimo “Que, como se puede apreciar, la solicitud de información se limita a requerir la entrega, en un único soporte, de datos que ya son públicos por su propia naturaleza, y son accesibles a través de los mecanismos dispuestos por la propia Universidad

requerida.

En efecto, una extensión o dominio de internet es un nombre único que identifica a un sitio web, siendo su propósito principal traducir las direcciones IP de cada activo en la red a términos memorizables y fáciles de encontrar. En este sentido, cualquier usuario puede saber qué extensión “.cl” se encuentra o no registrada ante NIC Chile, mediante el simple ejercicio de ingresar su dirección en el motor de búsqueda dispuesto por la propia institución, o en cualquiera de los tantos otros mecanismos dispuestos en la web.” Finalmente en el fundamento duodécimo del citado fallo, la Excma. Corte Suprema agrega y dictamina que “...cada dominio registrado (hecho que no es secreto o reservado, como quedó asentado) permite que cualquier persona acceda a la información básica del titular del registro, según se explicó en el motivo noveno precedente, nuevamente a través de las herramientas que provee el propio centro NIC Chile, entre otros, entidad que necesariamente ha sido quien ha nutrido al protocolo “WHOIS” de la información que, ahora, alega como sensible y apta para vulnerar los derechos comerciales y económicos de terceros;..”



NOVENO: Que, en virtud de los razonamientos anteriores, no cabe sino concluir que, en el presente caso, como se ha dicho precedentemente, las causales de secreto o reserva esgrimidas por la reclamante -Universidad de Chile-, no se configuran en modo alguno, por lo que el reclamo de ilegalidad deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y vistos las normas constitucionales y legales citadas, **SE RESUELVE:**

Que **SE RECHAZA, sin costas**, el Reclamo de Ilegalidad interpuesto por la Universidad de Chile, en contra del Consejo para la Transparencia.

Regístrese y archívese.

Redacción del ministro señor Aguilar.

N°Contencioso Administrativo-614-2020.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero y por el Ministro señor Alejandro Aguilar Brevis. No firma el señor Aguilar por encontrarse ausente.



Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda A., Elsa Barrientos G. Santiago, once de octubre de dos mil veintidós.

En Santiago, a once de octubre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

